



**Medellín, primero (01) de diciembre dos mil veintidós (2022)**

**REFERENCIA:** RECURSO DE APELACIÓN- ORDINARIO LABORAL  
**DEMANDANTE:** YOVAN VARGAS VARGAS  
**DEMANDADOS:** CONCRETOS Y ASFALTOS S.A. - CONASFALTOS S.A.  
**PROCEDENCIA:** JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE BELLO  
**RADICADO:** 05088-31-05-001-2020-00016-01

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso de apelación, interpuesto por la sociedad demandada, contra el auto del 05 de agosto de 2022, dictado por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE BELLO, mediante el cual se declararon imprósperas las excepciones previas de FALTA DE PODER PARA ACTUAR, INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES E INEPTA DEMANDA propuestas la demandada, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia, instaurado por el señor **YOVAN VARGAS VARGAS** en contra de la sociedad **CONCRETOS Y ASFALTOS S.A.** (en adelante CONASFALTOS S.A.).

El presente asunto fue debidamente discutido por los miembros integrantes de la Sala, acogiénzose el proyecto de providencia presentado por el Magistrado Ponente Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, consignado en los siguientes términos:

### **1. ANTECEDENTES**

El actor formuló demanda ordinaria laboral contra CONASFALTOS S.A., a través de la cual pretende se declare la existencia de una relación laboral con la demandada entre 04 de mayo de 2012 y el 21 de mayo de 2019, la terminación unilateral y sin justa causa de dicha relación laboral por parte del empleador y como consecuencia de ello se condene a la demandada al pago de la indemnización por despido sin justa causa, y además, los salarios, prestaciones sociales y vacaciones dejados de percibir hasta la fecha de presentación de la demanda.

La demanda fue admitida mediante auto del 11 de febrero de 2020.

CONASFALTOS S.A., le dio respuesta a la demanda, formulando varias excepciones, entre ellas las previas que denominó **FALTA DE PODER PARA ACTUAR, INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES E INEPTA DEMANDA**, argumentando en síntesis que la apoderada del demandante no cuenta con poder para incoar demanda frente a la mayoría de las pretensiones condenatorias, y que por tanto es evidente que el togado ha obrado por fuera de las facultades que se le confirieron, agregando solicitudes de condena para cuya interposición no estaba autorizado y que además se encuentran en palmaria contradicción con lo pedido en pretensiones que si estaba autorizado a realizar.

Asimismo, indicó que en la demanda son numerosas las pretensiones que se contradicen y excluyen mutuamente, por lo que nos encontramos ante un vicio insubsanable en la demanda que está llamado a hacer fracasar la misma.

Aduce que la primera contradicción insalvable se configura entre las primeras y segundas declarativas y las pretensiones de condena contenidas en los literales C, D, E, F, pues en estas el demandante al señalar que el contrato terminó, según él de manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador el 21 de mayo de 2019, razón por la que no sería objeto de discusión el hecho de que el contrato finalizó, fundamentándose incluso en este punto para solicitar la indemnización por despido sin justa causa, pero de manera contraria solicita el pago de salarios, vacaciones y prestaciones sociales dejadas de percibir hasta la presentación de la demanda, cosa que implicaría que el contrato no finalizó, significando esto que el despido que alega y solicita a la jurisdicción declarar no se dio y de esta manera estas pretensiones no se pueden compaginar, pues si lo que pretende el demandante es el pago de la indemnización por despido sin justa causa, está reconociendo expresamente que el contrato terminó, a contrario sensu, si lo que pretende es que se paguen los salarios y prestaciones dejados de percibir, estaría reconociendo que la terminación por él alegada y con base en la cual solicita la indemnización en el literal A no existió, pues la única forma de que se causaran esos supuestos “salarios dejados de percibir” después de la liquidación del contrato de trabajo – que el mismo demandante en el hecho noveno reconoce se le pagó y frente a la cual no hace reclamo alguno- es que la finalización del vínculo no se hubiese dado. Por lo tanto, no pueden prosperar unas pretensiones si no fracasan las otras y de esta manera estamos ante una inepta demanda cuyo trámite daría lugar a una nulidad.

Finalmente manifiesta la demandada que la demanda incumple varios de los requisitos del artículo 25 del CPTSS y demás normas concordantes, dado que no existe claridad en lo relativo a la designación del juez al que se dirige, pues mientras en el encabezado se indica que la misma se interpone ante el juez del circuito de Bello, el poder conferido para el demandante se encuentra dirigido al juez de pequeñas causas, además de ello, en lo relativo a la estimación razonable de las pretensiones, el demandante no realiza la estimación de la cuantía para determinar la competencia y sobre todo el trámite procesal que se le ha de imprimir al litigio, y se limita hablar de mínima cuantía, figura inexistente en el derecho laboral ya que el CPTSS en su artículo 12 nunca hace mención a este criterio de determinación de cuantía, sino que divide los procesos en razón de la misma en de primera y de única instancia.

## 2. DECISIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA:

La oficina judicial de primera instancia, en el trámite del proceso y en la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., en la etapa de decisión de excepciones, llevada a cabo el día 05 de agosto de 2022, al resolver sobre las excepciones previas las declaró imprósperas, luego de concluir lo siguiente:

En cuanto a la excepción previa de FALTA DE PODER PARA ACTUAR, señaló que si bien la falta de poder para actuar, no se encuentra enlistada como excepción previa dentro de las que consagra el artículo 100 del CGP, se abordaría el estudio de la misma, teniéndola como **“incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado”**, dado que el tema central de la excepción gira en torno a la representación de la parte, específicamente al poder que fue conferido para ejercer la representación del demandante y a las facultades otorgadas mediante el mismo, concluyendo respecto de dicho medio exceptivo, que si bien en los términos del artículo 74 del CGP, los poderes para asuntos especiales deben estar determinados y claramente identificados, el artículo 77 del mismo estatuto, establece como facultades del apoderado la *formular todas las pretensiones que estime convenientes para beneficio del poderdante*, y por tal razón, examinado el poder a la luz de tales artículos, se entiende que la apoderada del demandante, efectuó sus pedimentos conforme con la naturaleza del poder a ella conferido y haciendo uso de las facultades que por ley tiene derecho.

En lo que tiene que ver con la excepción de INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES expuso la *a quo* que, conforme lo dispone el artículo 25A del CST, en la demanda pueden acumularse pretensiones, siempre y cuando; 1. El juez sea

competente para conocer de todas, 2. las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias y 3. todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

Manifestó que, en el presente asunto, todas las pretensiones formuladas son aptas para el conocimiento de esa Judicatura y todas se deben tramitar por el procedimiento ordinario laboral de primera instancia y que en su momento el despacho establecerá si hay lugar a imponer las condenas solicitadas o si se absuelve frente a las mismas.

Argumento también que, en todo caso, estos defectos no son óbice, para que se siga conociendo del proceso, pues es deber del Juez, interpretar la demanda y darle un sentido lógico y consecuente acorde con los hechos expuestos en ella y los pedimentos esbozados.

Finalmente, en lo que atañe a la excepción de INEPTA DEMANDA, manifestó la falladora de primer grado que si bien le asiste razón al apoderado en cuanto a los errores endilgados, al ser cierto que efectivamente el poder se dirigió al Juez Laboral de pequeñas causas de Bello y la demanda al Juez Laboral del Circuito de Bello, en función de la interpretación que debe hacer el juez de la demanda, entiende el despacho que pudo haberse presentado confusión al momento de plasmar en el poder, el Juez a quien se dirigía, dado que las demandas que no exceden 20 veces el salario mínimo, según el artículo 12 del CPTSS, son de conocimiento en única instancia de los Juzgados Municipales de Pequeñas Causas Laborales, sin embargo teniendo en cuenta que en este circuito judicial, no existen tales juzgados la competencia radica en los jueces laborales del circuito.

### **3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:**

El apoderado de la sociedad demandada, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación, en el cual indicó que, si bien no se discute lo señalado por el despacho en cuanto a la gran relevancia que en la jurisdicción laboral tiene el principio de la autonomía funcional, a través del cual, el juzgado, como garante efectivo del acceso a la administración de justicia, debe interpretar de manera integral el escrito de demanda en busca del verdadero sentido del documento y el alcance de la protección judicial solicitada, ello no significa que en aras de mantener o proteger ese interés superior se desconozcan los derechos de las demás partes procesales.

Señala que, si bien no hay ninguna duda que el juzgado funcionalmente tiene competencia para resolver sobre lo que se le está solicitando, lo cierto es que el debido proceso implica para ambas partes la posibilidad de poder ejercer de manera real y efectiva sus derechos de contradicción y defensa.

Expone que lo que se plantea entonces con la decisión recurrida es que la demanda puede presentarse de cualquier forma y se puede solicitar cualquier cosa que el togado de turno considere, y el despacho analizará si es procedente o no, lectura que es equivocada porque vulnera el derecho de defensa del demandado, y es así como en el presente proceso, no se está precisando si lo que se va a discutir es, la terminación unilateral de una relación laboral y el consecuente pago de la indemnización por terminación unilateral o no, sino que por el camino se va a ir viendo qué procede y qué no, y en ese orden de ideas, la pregunta es, en que momento podrá ejercer la demanda su ejercicio del derecho de defensa, pues precisamente cuando se traba la Litis, es decir, al dar respuesta a la demanda, que es el momento procesal para ejercer ese derecho a la defensa, es donde se plasma la teoría de defensa de la demandada, donde frente a unos hechos concretos y a unas pruebas, ejerce su derecho de contradicción, presentando o solicitando pruebas, pero si hay que atenerse a lo que aparezca en el proceso, no es posible materializar ese derecho de defensa pues la Litis no está trabada, y si bien es una interpretación muy garantista por parte del despacho, lo cierto es que es demasiado amplia.

Señala que si bien se acepta la tesis jurisprudencial traída por la *a quo*, en cuanto a que el poder no necesariamente debe provenir del abogado sino también de la parte, quien no tiene que tener conocimientos jurídicos, lo cierto es que la demanda si proviene del profesional del derecho, quien como abogado titulado tiene unos deberes que les exigen cumplir con ciertas rigurosidades y por tanto no se comparte ese excesivo proteccionismo, es decir ese uso excesivo del principio de la autonomía funcional ya que con ello se está castigando el debido proceso de la parte demandada, pues por ejemplo frente al tema de la indebida acumulación de pretensiones, no es que la *a quo* carezca de competencia para decidir de fondo, sino que desde el punto de vista de la defensa, no se puede dilucidar, si lo que debe demostrarse en el proceso es que la terminación de la relación laboral se dio como producto de una renuncia del trabajador, o que se le adeudan salarios, prestaciones y vacaciones, pretensiones estas que claramente sí son excluyentes entre sí, dado que, finalizada una relación laboral, por defecto finalizan todas las obligaciones laborales, y por ende, si está claro que la relación laboral terminó, la discusión entonces no tiene por qué versar sobre la causación posterior a la terminación, de salarios, prestaciones sociales y vacaciones,

y por lo tanto debe salir adelante la excepción de indebida acumulación de pretensiones entre las declarativas y las pretensiones de condena, en especial los literales C, D, E y F.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la excepción de inepta demanda, señala que en la misma se hizo alusión a las inconsistencias en la designación del Juez y la estimación razonable de las pretensiones, inconsistencias que la misma juez ha puesto de presentes pues saltan a la vista, y si bien no se discute que hay un interés superior por proteger los derechos fundamentales, no se debe olvidar que quienes actúan son abogados titulados que tienen unas obligaciones que cumplir y por tanto, ni la demanda, ni su respuesta, pueden ser presentadas de cualquier manera.

#### **4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, únicamente el apoderado judicial de La demandada CONASFALTOS S.A., allegó escrito de alegaciones, en el cual señaló lo siguiente:

“Acusa inconformidad con la decisión adoptada por el A quo, por cuanto si bien en virtud del principio de la autonomía funcional el juzgador debe interpretar de manera integral el escrito de demanda extrayendo el verdadero sentido del documento y el alcance que busca de la protección, ello no significa que el litigio pueda dejarse abierto sin delimitarse su objeto, para que, en el desarrollo del proceso el Juez revise “lo que pueda aparecer”.

El Debido Proceso no aplica de manera exclusiva para el demandante, sino que, es una garantía constitucional que se le debe garantizar a las partes procesales, y en ese sentido, aceptar que no se limiten los alcances del litigio para por el camino ir determinando que procede o no, le vulnera al demandado su oportunidad real y material de ejercer de manera real y efectiva del derecho de contradicción y defensa.

En cuanto a la exceptiva invocada por la parte activa 3.2 Indebida acumulación de pretensiones, se genera reproche frente a las consideraciones del A quo por cuanto verdaderamente resultan excluyentes algunas de las pretensiones formuladas por la parte activa, específicamente las contenidas en los literales C, D y F, tema que no puede pasarse por alto, ni es un tema menor pues es necesario enmarcar el objeto de la litis respecto a cuál va a ser el tema a discutir (en el debate), probar (por parte del demandante) y defenderse (el demandado).

En el presente caso desde la misma demanda queda claro que la relación de trabajo terminó y la discusión versa sobre la causal de terminación invocada por el empleador y la pretensión del pago de la indemnización por terminación unilateral, en palabras más simples, el empleador invocada como causal de terminación del contrato la renuncia y el trabajador aduce que él no renunció y que por la tanto la terminación fue unilateral y sin justa causa y que por ello aspira a que se le pague al indemnización por terminación unilateral.

De manera inti técnica y “por si acaso” se le adosan pretensiones de pago de salarios y prestaciones causados con posterioridad al fenecimiento del vínculo subordinado, lo que resulta improcedente si tenemos en cuenta que el presente caso no busca el reintegro del trabajador, por tanto la pretensión de pago de salarios y prestaciones sociales causados con posterioridad a la terminación del contrato de trabajo es improcedente, es unívoco que el demandante no invoca amparo constitucional alguno que pudiera llevar a declarar la ineficacia de la terminación y la consecuente reinstalación en el empleo, por tanto, estando claro lo anterior, la pretensión de salarios y prestaciones sociales causados después de la terminación del vínculo laboral es improcedente, y constituye una pretensión excluyente frente a la pretensión principal, por lo que en ese sentido, debe declararse probada la exceptiva formulada. No se comparten las razones del A quo, en la medida que en síntesis invoca como razones de su decisión por una parte, que el Despacho tiene competencia para resolver la causación de salarios y prestaciones causados luego de la terminación del contrato de trabajo y de otra pate agrega que en todo caso en el trascurso del debate y conforme a lo que se prueba o no, se podrá decir si es procedente o no la pretensión. Frente a la primer consideración del A quo, en momento alguno se ha reprochado, ni desconocido que el fallador de primer grado tenga competencia funcional para resolver el asunto, es claro y por supuesto que de manera genérica la tiene, pero no se trata de esto, sino la limitación del objeto de la litis, pues de aceptarse la tesis del A quo, sería aceptar que se convoca procesalmente al debate, para que en el transcurso se vaya verificando el cumplimiento de las obligaciones reclamadas y las demás que pudieran analizarse, posición con la que, se le estaría vulnerando el debido proceso al no precisarle frente a qué debe defenderse, qué debe probar, qué obligaciones debe acreditar, sin que este sea el quid del asunto, ni haya sido el tema atacado en la respuesta a demanda, ni mucho menos en el recurso de alzada en contra de la decisión impugnada.

En este punto se debe recordar que el artículo 25-A establece la forma y los requisitos para una correcta acumulación de pretensiones, resaltando entre estos el de que las mismas “no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.”, requisito contenido en el numeral segundo del inciso primero de esta disposición y cuyo incumplimiento es insubsanable y por ende declarable de oficio, tal y como lo dice el mismo artículo:

*“Cuando se presente una indebida acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los incisos anteriores, pero sí con los tres numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa.”*

De esta manera, el incumplimiento de la precitada condición no puede ser subsanado ni siquiera cuando la misma no se propone como excepción previa en la contestación, lo que es apenas lógico pues bajo ningún motivo se puede prohijar por parte de la administración que se le solicite realizar declaraciones contradictorias entre sí.

De esta manera vemos que en la demanda son numerosas las pretensiones que se contradicen y excluyen mutuamente, por lo que nos encontramos ante un vicio insubsanable en la demanda que está llamado a hacer fracasar la misma.

La primera contradicción insalvable que nos encontramos es la que se configura entre las primeras y segundas declarativas y las pretensiones de condena contenidas en los literales C, D, E, F.

Esto pues en las pretensiones declarativas aludidas es claro el demandante al señalar que el contrato terminó, según él de manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador el 21 de mayo de 2019, razón por la que no sería objeto de discusión el hecho de que el contrato finalizó, fundamentándose incluso en este punto para solicitar la indemnización por despido sin justa causa.

Incluso dentro de las mismas pretensiones encontramos contradicciones internas, tal y como se ve en la del numeral H en la que al tiempo se pide la sanción del artículo 65, los intereses moratorios y la indexación, llegados a este punto es importante recalcar que las tres solicitudes reunidas en un solo numeral se excluyen mutuamente, en primer lugar, porque la sanción moratoria entendida como un día de salario por cada día de retardo en el pago, excluye la posibilidad de intereses moratorios esto pues los mismos solo son procedentes dentro de la sanción en los casos de trabajadores que ganan más de un salario mínimo, después del mes 24 y nunca son



concurrentes con el conteo de un día de salario por cada uno de retraso, sino que cuando se aplican estas dos formas de indemnización -en los casos de trabajadores que ganan más de un salario mínimo- las mismas son siempre sucesivas.

En cuanto a la exceptiva invocada por la parte activa 3.3 Inepta demanda, el libelo también incumple varios de los requisitos que exige el artículo 25 del CPTSS y demás normas concordantes.

En lo relativo a la designación del juez al que se dirige, en la misma no encontramos claridad, pues si bien en su encabezado se indica que la misma se interpone ante el juez del circuito de Bello, el poder conferido para el demandante se encuentra dirigido al juez de pequeñas causas.

En lo relativo a la estimación razonable de las pretensiones, consagrado en el artículo citado ut supra así como en el numeral 1 del artículo 26 del Código General del Proceso aplicable por analogía del artículo 145 del CPTSS, vemos que en el presente, el demandante no realiza la estimación de la cuantía para determinar la competencia y sobre todo el trámite procesal que se le ha de imprimir al litigio, además de lo anterior se limita hablar de mínima cuantía, figura inexistente en el derecho laboral ya que el CPTSS en su artículo 12 nunca hace mención a este criterio de determinación de cuantía, sino que divide los procesos en razón de la misma en de primera y de única instancia.

Obsérvese además que frente a este aspecto puntual de la estimación razonable de las pretensiones y a la acumulación de pretensiones que no sean excluyentes entre sí, señaló el A quo al minuto 12:00 del video en el que se registró la audiencia:

“Si bien está solicitando está solicitando el actor la declaratoria de la terminación del contrato sin justa causa y la consecuencia de ello, que es la sanción del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que también está solicitando el pago del salario, prestaciones sociales y vacaciones causas desde la terminación del contrato hasta el momento de presentación de la demanda, considera el despacho que precisamente ese será el objeto de la litis, establecerse si el demandante fue despedido sin justa causa y cuál es la consecuencia que puede derivarse de esa de ese despido. Se establecerá entonces si habría lugar a condenar al pago de la indemnización por despido y puesta en el artículo 64 del Código sustantivo de trabajo y se verificará, de acuerdo a las disposiciones normativas si habría lugar a condenar o no al pago de un salario y prestaciones sociales, además de vacaciones desde la terminación del

contrato de trabajo hasta el momento de la presentación de la demanda, es decir, ello no quiere, el hecho de que se haya instaurado de manera concomitante la solicitud de indemnización por despido injusto y el pago de un salario sin prestaciones no lo hace no las hace excluyentes. En efecto, el despacho, en un momento de dictar sentencia, verificará si el demandante tiene o no derecho al reconocimiento de las prestaciones económicas a las que está haciendo referencia, si hay alguna norma que la existente o no, pero el solo hecho de instaurar las pretensiones no las hace excluyente ... pruebas allegadas de estudio normativo que se estableciera el lugar o no a su posición, pero no los consideren excluyentes. Como indiqué, igualmente se tiene en cuanto a los intereses moratorios, la indexación y la sanción moratoria contenido en el artículo 65 del Código sustantivo del trabajo, pues al momento de dictar sentencia establecerá el despacho si hay lugar a imponer esa sanción, si hay lugar a imponer esos intereses ... sobre qué rubros habría lugar o en qué caso, no pediría cada una de las explicaciones sin que las considere tampoco excluyentes. Esos defectos, además, no son óbice para que siga conociendo el proceso”

La anterior interpretación constituye una equivocada lectura del artículo 25 del CPTy SS, en otras palabras, un desconocimiento de la norma procesal pues insistimos, no se trata de si sería competente el Juez para conocer (conceder) las pretensiones, si no que desde la técnica no deben, no pueden formularse pretensiones contradictorias entre sí, para que sea el Juez quien corrija este error de la técnica y oriente la demanda en forma correcta depurando los errores del libelista y terminar por defecto, afectando el Debido Proceso del demandado.

Son excluyentes la indemnización por terminación sin justa causa con salarios causados con posterioridad a la terminación, como es excluyente la indemnización moratoria del artículo 65 del CST con la indexación, como también son excluyentes las dos anteriores frente a los intereses moratorios.

Si bien el Juez como director del proceso y en virtud de la libre formación del convencimiento y el análisis de los hechos pretensiones y pruebas se forma su convencimiento cuando afirma el A quo: “considera el despacho que precisamente ese será el objeto de la litis, establecerse si el demandante fue despedido sin justa causa y cuál es la consecuencia que puede derivarse de esa de ese despido” mal pudiera bajo esa formula “amplia” y “genérica” dejar abierta a consecuencia que puede derivarse de esa de ese despido porque también en palabras del Despacho es de acuerdo a las disposiciones normativas que se determinará la consecuencia que puede derivarse de esa de ese despido y es por ello que de manera concreta se

deberá delimitar cuál será esa consecuencia a estudiar, no dejando abierta para ver por el camino, cual nos encontramos, o cual se ajusta, precisamente, porque esas consecuencias están definidas en la ley sustantiva y deberá entonces delimitarse su estudio a ellas, sin dejar el tema en abstracto a cuál es la consecuencia que puede derivarse, si no que esta eventual consecuencia debe determinarse y limitarse.”

## 5. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

El problema jurídico a resolver en esta instancia se circunscribe a establecer si como consecuencia de las irregularidades que denuncia la sociedad demandada existen en el libelo demandatorio, deben o no declararse probada la excepción previa de “Inepta demanda por falta de los requisitos formales o Indebida Acumulación de Pretensiones” y como consecuencia de ello dar por finalizado el trámite.

Por ser competente esta superioridad, para conocer del recurso de apelación contra el auto que resuelve sobre excepciones previas conforme al Art. 65 del CPT y de la SS, se procede a resolver el mismo, previas las siguientes,

## CONSIDERACIONES:

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

Establecido lo anterior, se tiene que en el trámite del proceso y en la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., en la etapa de decisión de excepciones, al resolver sobre las excepciones previas de al resolver sobre la excepciones previas de **FALTA DE PODER PARA ACTUAR, INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES E INEPTA DEMANDA** propuestas por la demandada CONASFALTOS S.A. las declaró imprósperas, esgrimiendo como argumentos los que ya fueron reseñados en extenso en el acápite correspondiente, decisión a la que se opuso el apoderado de la sociedad demandada, con los argumentos que igualmente fueron señalados previamente por la Sala.

Es así entonces que la decisión en esta instancia se circunscribe a establecer si como consecuencia de las irregularidades que denuncia la sociedad demandada existen en

el libelo demandatorio, debe o no declararse probada la excepción previa de “Inepta demanda por falta de los requisitos formales o Indebida Acumulación de Pretensiones” propuesta por la sociedad demandada y como consecuencia de ello dar por finalizado el trámite.

Analizados los referidos argumentos, tanto de la falladora de primer grado, como del recurrente, encuentra la Sala que, conforme lo normado en el numeral 5 del artículo 100 del Código General del Proceso, el demandado podrá proponer como excepción previa la de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones y en su artículo 101 regula el trámite, disponiendo que sí prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante.

Quiere ello decir que, si el trámite puede continuar o las falencias de las cuales adolece el libelo genitor en lo que tiene que ver con las pretensiones de la demanda pueden ser subsanadas por el juez en su condición de director del proceso, nada impide al operador seguir adelante con el proceso subsanando el defecto, y en tal sentido, a juicio de la Sala, la existencia de esas falencias, no necesariamente generan como consecuencia que se desestime el estudio de la demanda por vía de las excepciones previas.

Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que, en el derecho procesal las excepciones no pueden entenderse como sanciones, sino como remedios para subsanar las falencias que se presenten en los respectivos trámites, de ahí que a través de ellas se busque depurar el proceso, y su formulación, desde esta óptica, ha de beneficiar al demandante porque se identifica oportunamente un vicio, impidiendo la emisión de una sentencia inhibitoria, pues de lo que se trata es que el proceso llegue perfectamente desarrollado al punto de dictar sentencia de mérito, de ejercer la jurisdicción para resolver el litigio planteado y por tanto no todo defecto en que se incurra necesariamente debe ameritar que no se continúe con el trámite del proceso.

Bajo este contexto, considera la Sala que las precisiones hechas por la juez de primera instancia sobre la FALTA DE PODER PARA ACTUAR, se ajusta parcialmente a derecho, respecto del error de dirigirse el poder al JUEZ LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS y presentarse la demanda ante el JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO, pues el requisito del poder para la demanda debe estudiarse a la luz del Nral 4 del Artículo 133 del CGP, que establece como causal de nulidad del proceso, cuando quien actúa como

apoderado judicial carece íntegramente de poder, por lo que al existir el poder para actuar, si bien es deseable que un profesional del derecho, lo elabore indicando correctamente el juez a quien se dirige y las pretensiones, para las que se le otorga, si así no se efectúa, tal imprecisión no genera que si no se advirtió al momento del control de la demanda, no se pueda tramitar el proceso con el poder deficientemente otorgado.

Respecto del anterior asunto se pronunció la Sala de Casación Laboral de la CSJ en la sentencia SL 20094 de 2017, en los siguientes términos:

“Finalmente, una vez analizado el poder otorgado al abogado Alejandro Miguel Castellanos López (fol. 1 demanda principal), en correspondencia con las pretensiones de la demanda (fol. 3), la Corte puede advertir fácilmente que sí estaba facultado para solicitar la declaratoria de ilegalidad de la huelga, entre otras cosas, por recaer sobre un servicio público esencial.

La lectura del apoderado de la organización demandada en este punto vuelve a ser en extremo rigorista y contraria a la jurisprudencia que ha insistido en la necesidad de hacer lecturas sistemáticas y razonables de la demanda y sus componentes, que rescaten e interpreten la integridad de sus fundamentos. En la sentencia CSJ SL11680-2014, en un proceso de esta misma naturaleza, la Corte señaló al respecto:

[...]

En este caso, la pretensión encaminada a que se declare que Avianca S.A. desarrolla una actividad en la que no es posible el ejercicio de un cese de actividades, si bien no está copiada expresamente en el poder conferido al apoderado de la empresa, sí se relaciona íntimamente con las pretensiones de que se declare la ilegalidad del cese promovido por ACDAC, por recaer sobre un servicio público esencial».

De otra parte, en principio por las mismas razones antes explicadas no habría lugar a considerar la falta de poder respecto de las pretensiones distintas a la indemnización por despido injusto, pues si bien el poder solo se otorga para petitionar la indemnización por despido injusto, en todo caso no hay carencia total de poder.

No obstante lo anterior, considera la Sala, que le asiste razón a la parte accionada, en cuanto a que se presentan los requisitos para que se declare próspera la excepción previa de INEPTA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES, respecto de las pretensiones distintas a la indemnización por despido injusto, toda vez que el Art. 25 del CPT y la SS, modificado por el Art. 12 de la Ley 712 de 2001, exige como requisitos de la demanda, entre otros que contenga; “7. *Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados.*” y “8. *Los fundamentos y razones de derecho.*”, requisitos esenciales, para que la parte accionada, pueda ejercer sus derechos de contradicción y defensa respecto de los

hechos que se le imputan y las razones de derecho o consecuencias jurídicas que de ellos se derivan, que fundamentan las pretensiones.

Así entonces, toda pretensión de una demanda debe contener unos fundamentos de hecho que las origine, de los que la parte accionada pueda ejercer los derechos de contradicción y defensa, en especial solicitando pruebas para controvertirlos.

En el presente caso, en la demanda se petitiona el reconocimiento de salarios, prestaciones sociales y vacaciones dejados de percibir por el actor hasta la fecha de presentación de la demanda, sin que se indique los hechos u omisiones que sirvan de fundamento a esta pretensión, ni se indican razones de derecho que las fundamenten, pues solo se aduce en la demanda que el actor fue despedido sin justa causa, porque se le hizo firmar una carta de renuncia bajo coacción y que no se le ha pagado la indemnización por despido sin justa causa, lo que constituye fundamento de hecho para la pretensión de la referida indemnización, pero no para la pretensión del pago de salarios, prestaciones sociales y vacaciones hasta la fecha de la demanda. Tampoco se observa en el acápite de razones de derecho del libelo, que se indiquen razones de derecho que fundamenten las pretensiones del pago de salarios, prestaciones sociales y vacaciones hasta la fecha de la demanda.

Por las razones antes expuestas se configura la INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES, respecto de las pretensiones del pago de salarios, prestaciones sociales y vacaciones hasta la fecha de la demanda, por lo que se revocará el auto de primera instancia que la declaró impróspera, para en su lugar hacerla prosperar, por lo que el proceso solo podrá continuar respecto de la pretensión de la indemnización por despido injusto.

SIN COSTAS en ninguna de las instancias, por haber prosperado parcialmente las excepciones previas.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: REVOCAR parcialmente** el auto interlocutorio del 05 de agosto de 2022 proferido por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE BELLO que declaró imprósperas la excepción previa de INEPTA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES propuestas la demandada, dentro del proceso ordinario

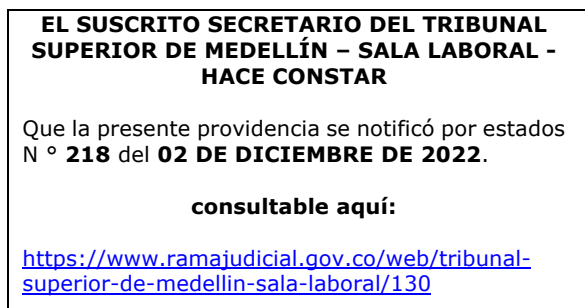
laboral de primera instancia, instaurado por el señor **YOVAN VARGAS VARGAS** en contra de la sociedad **CONCRETOS Y ASFALTOS S.A. - CONASFALTOS S.A.**, para en su lugar DECLARAR la prosperidad de la referida excepción, respecto de las pretensiones del pago de salarios, prestaciones sociales y vacaciones hasta la fecha de la demanda, por lo que el proceso solo podrá continuar respecto de la pretensión de la indemnización por despido injusto.

**SEGUNDO:** SIN COSTAS en ninguna de las instancias, por haber prosperado parcialmente las excepciones previas.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS.

Devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Se firma en constancia por los que intervinieron en la decisión, los Magistrados,



Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e8c6d5db1154feb9414b9cf30789efba3befda0e431143b8af4369179fb953b1**

Documento generado en 01/12/2022 02:32:24 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**